Decisiones en el parque jurásico

Las niñas tienen 3 y 5 años. Su padre es un fiscal federal en ejercicio. Hace un año se comprobó en el cuerpo de las niñas que habían sido abusadas sexualmente por este hombre que, sin embargo, consiguió que un fallo de la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de Dolores ordenara la revinculación con sus hijas.

Por Roxana Sandá

Para la abogada Mariela Zaldúa, el impulso de exponer públicamente el caso de sus hijas fue una decisión dolorosa. No es sencillo, qué duda cabe, decir frente a los medios que las niñas de 3 y 5 años fueron abusadas sistemáticamente por su padre, un joven y respetadísimo fiscal federal. A duras penas logró tolerar el suplicio que ambas soportaron durante los interrogatorios en Cámara Gesell: seis en total a cada una, donde un álbum de caras extrañas se empeñó en las repreguntas y la escucha obsesiva de dos voces infantiles describiendo el mapa lastimoso del abuso que llevan encima. "Pero de ninguna manera voy a soportar que un fallo burdo de Cámara me ordene revincular a mis hijas con el hombre imputado por esta aberración", advierte con desprecio profundo ante la sola idea de anunciarles a las pequeñas un nuevo contacto físico por orden judicial con el hombre que ellas más temen en este mundo.

Mariela quiere pensar que la Justicia argentina "va a actuar con los ojos vendados, defendiendo los derechos elementales de mis hijas a la integridad física y psíquica, como lo establece la Convención Internacional de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes". Sospecha que la abundancia de legislación vigente no logre rozar siquiera los talones del acusado, el fiscal federal de Dolores, Ramiro González, que en la actualidad se desempeña al frente de la Unidad Fiscal de Investigaciones en Materia Ambiental (Ufima), que depende de la Procuración General de la Nación.

La pareja se había divorciado de mutuo acuerdo a principios de 2007, por causas ajenas a lo ocurrido en mayo de ese año, cuando la mayor de las niñas contó a su madre entre llantos las vejaciones a las que eran sometidas ella y su hermana. "Al principio no lo podía creer, pero comencé a tratarlas con psicólogas. Los psicodiagnósticos ratificaron cada uno de los relatos", que culminaron el 28 de abril último en la internación de la más pequeña en el sanatorio Mater Dei, de Buenos Aires, víctima de lesiones internas y externas, y una infección grave, como consecuencia de abuso sexual. "Realicé la denuncia de forma inmediata, con los psicodiagnósticos en la mano y el acompañamiento de las psicólogas y profesionales del sanatorio, que se avinieron a atestiguar en la causa pese a las amenazas reiteradas a las que nos sometió González."

En el expediente de la causa penal que se tramita en el Juzgado Nacional en lo Criminal de Instrucción N° 30 Secretaría 164, constan unos dieciséis llamados intimidatorios de González a su ex esposa, uno de los cuales resalta por tratarse de una amenaza de muerte a ella y su familia, más otros aprietes telefónicos y carta documento incluida a las psicólogas que asisten a las niñas. "Había gente del Ministerio Público Fiscal que venía a amedrentarme a la puerta de mi casa. Hasta que el 1° de mayo me llamó mi ex marido para decirme que nos iba a matar a mí y a toda mi familia. No aguanté más esa locura y al día siguiente radiqué la denuncia" ante la Unidad Fiscal de Investigaciones para Delitos Contra la Integridad Sexual, Trata de Personas y Prostitución Infantil (Ufisex), pero el caso finalmente fue girado a la Justicia en lo Criminal. En todo este tiempo, la mujer comprobó que la impunidad puede tomar diversas formas. Las intimidaciones a manos de personajes cercanos a su ex, el recibimiento que funcionarios judiciales de la Ufisex le dieron a González en al menos dos oportunidades, la preocupación manifiesta desde la Procuración General de la Nación por preservar el caso de una difusión indeseada. "Ojalá la Justicia considere a Ramiro González como ciudadano común. Que el poder no apañe al imputado, con la cantidad de pruebas que existen en la causa. Sin embargo, cada una de mis hijas fue peritada en seis oportunidades, yo fui entrevistada en tres ocasiones. El jamás fue citado."

El caso también fue presentado ante el Consejo de Niños, Niñas y Adolescentes de la ciudad, ante el Comité Nacional Antimpunidad del Ministerio de Justicia y en el Comité Argentino de Seguimiento y Aplicación de la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño (Casacidn), que preside Estela de Carlotto y cuya directora ejecutiva, Nora Shulman, contabiliza como el sexto caso de pedofilia que recibe la institución en menos de seis meses, perpetrados por individuos encumbrados. "Acompañamos a Mariela y a esas madres que luchan por sus hijos e hijas con muchas dificultades. Se las revictimiza permanentemente, con instancias de descreimiento, y pongo el acento en el Poder Judicial y en la llamada 'corporación judicial'. Pareciera que cierran un círculo de protección a toda costa."

¿Con qué factores relaciona estas cuestiones?

—Con su relación con algún tipo de poder. Son situaciones que hace tiempo se ven agravadas por el tema del SAP (Síndrome de Alienación Parental argumentado por jueces y padres que intentan la revinculación) y

por esa concepción judeocristiana de que la familia es prioritaria, no importa lo que suceda hacia adentro. Es, precisamente, uno de los mayores temores que le corroen el sueño a Mariela, desde que un fallo de la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de Dolores, donde se tramita la causa civil, dispuso la reanudación del régimen de visitas asistido. "El voto de la jueza María Rosa Dabadié no sólo anula la suspensión del régimen de visitas que antes había resuelto otra mujer, la jueza de Paz de Castelli, María Carlota Pascua, al privilegiar el interés de las niñas y teniendo en cuenta las constancias existentes en la causa penal, "sino que lo funda en que aquéllas no fueron escuchadas por la jueza ni por la asesora de Menores de Dolores", explicó la abogada Lía Perroni, que representa a Zaldúa en la causa civil. Desde Casacidn se elevó una nota de preocupación a la Cámara Civil de Dolores, "porque si bien es cierto que la Justicia debe asegurar los derechos y libertades del imputado por la presunción de inocencia, también se debe resguardar, por sobre todo, la protección y el cuidado de las víctimas, en este caso de dos niñas de corta edad que manifiestan no querer estar con su padre 'porque nos lastima', como ellas mismas sostienen. No debe existir un fallo judicial que revincule a estas criaturas con el padre", advirtió Shulman. Desde que abandonaron su domicilio en Castelli, las chicas no tienen pesadillas. Asisten a un colegio que tomó nota de ese infierno, por lo que las docentes más cercanas las acompañan. "Se sienten contenidas, engordaron, están contentas, pudieron elevar su autoestima y la más chica habla hasta por los codos", enfatizó Mariela. "Quiero que se sientan merecedoras de una vida digna y que entiendan que nuestra condición de mujeres no es sinónimo de victimización ni de andar ocultándonos por el mundo." Lo dice aun sabiendo que le resta camino para eludir el aliento de una Justicia machista y gestos corporativos, empeñada en fomentar un desenlace inaceptable. La declinación social de la paternidad y el papel irremplazable asignado a la madre son verdades a la altura de la época que se vive. En este capítulo, al parecer, los universos ideológicos de la Justicia no han caído aún.

© 2000-2009 www.pagina12.com.ar | República Argentina | Todos los Derechos Reservados

Nota 1: Alguna vez vamos a tener que terminar con estas decisiones de gente que responde : es el padre que le toco en suerte...

Y como si estuviéramos en El Imperio Romano como si el Pater Familiae tuviera derecho a vida o muerte de su prole.

Creo que sería conveniente que en vez de estudiar derecho romano en primer año los abogados estudiaran un poco de la realidad argentina.

Porque es terriblemente triste para los niños que quedan desprotegidos por permanentes aberraciones jurídicas y a 20 años de la firma de la Convencion de Montevideo sobre los Derechos de los Niños, estamos como cuando vinimos de España.

Dice la mentada Convencion Art 9. inc 3 que no puede haber regimen de visitas cuando el niño corriera peligro fisico o sicologico.

Saben todos los Jueces Derecho Romano pero casi ninguno las Convenciones de valor y jerarquia Constitucional firmadas por la Argentina...

Lamento esto terrible que tiene que pasar esta mujer y creo que tenemos que hacernos eco de la lucha de proteger a los niños de estos terribles mosntruos que no son padres, son monstruos con poder y dinero. Un padre cuida, protege, ayuda, es como el sol que calienta a sus pollitos para que crezcan sanos , no podemos ser tan enfermos como Sociedad de equiparar a estos personajes nefastos con los padres de verdad. Tampoco se lo merecen.

Rachel Holway

Nota 2: El citado SAP, usado mundialmente por los verdaderos pederastas, fue creado por uno de ellos exclusivamente, **NO EXISTE COMO ENFERMEDAD Y TAMPOCO ESTA ACEPTADO POR LA ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD**

Por lo tanto, no puede ser utilizado por ningún juez bien nacido, porque legalmente no existe. Pero sí nos permite saber que estructura judicial y que elementos están actuando en este caso. A partir de aquí, conviene encargarse del juez y su entorno por posible corrupción y/o vinculaciones con mafias de prostitución infantil y trata de blancas. Ya que son los síntomas típicos que estamos detectando de estructuras mafiosas.

Marcelo J. Campos Pérez